



Allende: El olvido culpable de los civiles

María Eugenia Camus

Fuente: Rocinante, 03 de septiembre de 2003

"Que se diga que Allende y Cuba tenían controlados con sus aparatos paramilitares al gobierno es un insulto a las Fuerzas Armadas de Chile. El Plan Zeta y el Libro Blanco de Gonzalo Vial son un invento. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas son tan incompetentes que iba a haber 10 mil guerrilleros extranjeros y no lo sabían, cuando gobernaron con Allende desde el 72? Eso no es verdad". (Roberto Thieme, ex dirigente de Patria y Libertad. La Segunda 14.08.03).

Algo extraño está sucediendo en el ambiente este septiembre. Al caminar por el Paseo Ahumada sorprende oír, a todo volumen, las voces del Inti Illimani cantando a todo pulmón El Pueblo Unido con un sonido que logra apagar las decenas de voces de los ambulantes que ofrecen todo tipo de productos. De pronto, uno de ellos, al parecer contagiado con esa música de hace tres décadas, a voz en cuello grita : "El compañero Allende, sacar a mil, sacar a mil, antes que se acabe".

¿Que se acabe? Si justamente hace 30 años el gobierno de Salvador Allende fue brutalmente fulminado bajo las bombas que incendiaron y destruyeron La Moneda, mientras él permanecía dentro con un grupo de sus colaboradores más cercanos.

"Pasa algo —comenta una persona cuando escucha todos estos sonidos que provocan una mezcla de tristezas, nostalgias y sonrisas—, pero en Chile nunca había estado tan de moda ser allendista". Sin duda los sendos reportajes difundidos por Televisión Nacional, Chilevisión y Canal 13 han contribuido a que miles de chilenos que eran jóvenes, niños o que aun no nacían —casi el 50% de la población, según el INE— construya su propia percepción de los sucesos ocurridos y adopte su propia posición respecto de sus actores. Por cierto el de su principal protagonista, Salvador Allende, y también del antagonista, Pinochet.

Muchos rostros —en los que se refleja el paso de tres décadas— han aparecido en estos programas entregando su vivencia. Pero hay muchos otros de los que ni siquiera se conoce su nombre, otros prefieren que ni siquiera los recuerden asociados a esos hechos en los que participaron activamente, muchas veces vestidos de militares para formar parte de los grupos que ejecutaron a campesinos en el sur o a mineros en el norte. Hay otros que actuaron como colaboradores de los organismos de seguridad y no dudaron en entregar a compañeros de trabajo que hasta hoy están desaparecidos. También existió un

grupo de “elite intelectual” que se puso al servicio de la Junta Militar en las horas previas al Golpe para diseñar una estrategia de guerra psicológica —tal y como ha reconocido Federico Willoughby, primer asesor comunicacional de la Junta— que entregara argumentos suficientes para justificar la represión. El “Plan Z” fue su máxima expresión creativa y la causa por la que se asesinó a muchos inocentes cuyo único delito fue creer y seguir al “compañero Allende”.

Asesores comunicacionales y diplomáticos

Antes de que los miembros de la Junta de Gobierno llegaran a sus puestos de mando en esa madrugada del 11 de Septiembre del 73, el equipo de comunicaciones que debía redactar y difundir los primeros bandos militares, anunciando el derrocamiento de Allende, ya se había constituido. El vocero de prensa era el periodista de la Universidad de Chile Federico Willoughby a quienes muchos de sus colegas vinculaban a la CIA desde sus años en la universidad. Junto a él, cumpliendo otras funciones estaban Alvaro Puga —que escribía con el seudónimo de Alexis en el diario derechista Tribuna y llegó a ser Director de Asuntos Públicos de la Secretaría general de Gobierno y actualmente es editor del sitio web que apareció vinculado a exagentes de la CNI—; Gastón Acuña, con responsabilidades en Informaciones. A este equipo y para trabajar en la formación de las Organizaciones Civiles, se integró posteriormente Gisela Silva.

La génesis de la DINACOS (Dirección Nacional de Comunicaciones), donde eran revisados todos los artículos de prensa y el epicentro de muchas censuras a los medios que no se atuvieran a la normativa uniformada en materias de prensa, está en este equipo. Algunos de los papers que preparaba el equipo de comunicaciones llegaban a otra instancia: el Comité Asesor de la Junta (COAJ) que funcionaba en los pisos 7 y 8 del edificio Diego Portales, bajo la jefatura del actual senador designado Julio Canessa. Estaba organizado como un estado mayor, con estructuras y sistemas de análisis militar. Tenía también una oficina técnica donde participaban algunos abogados que debían dar cauce a los decretos militares. Este equipo estaba encabezado por Fernando Lyon —fiscal investigador del crimen del general Schneider— que trabajaba con Rubén Díaz Neira, Guillermo Pumpin y Julio Tapia Falk, quien posteriormente y por presiones del general Gustavo Leigh, fue designado Rector de la Universidad de Chile.

La Cancillería chilena sufría las secuelas del golpe y el país tenía todas sus representaciones en el extranjero descabezadas. 200 de los 400 funcionarios de carrera fueron despedidos en los primeros días posteriores al Golpe. Por otra parte, a medida que fuera de las fronteras se conocían las continuas violaciones a los derechos humanos de que eran víctimas los opositores al gobierno militar, las condenas de organismos internacionales y gobiernos democráticos se sucedían. A pesar de su rabia y de sus continuos ataques a las “sucesivas campañas del marxismo internacional”, Pinochet escuchó los consejos de algunos de sus asesores, entre ellos el del joven gremialista Jaime Guzmán. Poco a poco, este dirigente gremialista y conocido panelista, ganaba terreno en el círculo de hierro del dictador, provocando el enojo de algunos uniformados, especialmente del coronel Manuel Contreras, designado jefe de la DINA. “El Mamo” también había montado un aparato comunicacional que tenía como tarea montar “operaciones psicológicas” para contrarrestar la propaganda “adversa” y producir propaganda propia, información, desinformación elaborada por analistas, periodistas, publicistas al mando de Anthal Liphay, uno de los asesores más influyentes de Contreras. Operaciones represivas, como la publicación del listado de 119 prisioneros políticos, hoy detenidos desaparecidos; el asesinato de la familia

Gallardo en La Rinconada de Maipú y de la profesora y dirigente del MIR Lumy Videla, cuyo cadáver fue arrojado hacia el interior de la embajada italiana, fueron difundidos de acuerdo a libretos de la DINA por las pantallas de Televisión Nacional por el periodista Julio López Blanco y en Canal 13 por su colega Claudio Sánchez. Editor de este último canal era Manfredo Mayol —actual asesor comunicacional de la UDI y de Joaquín Lavín— quien fue nombrado tiempo después jefe de prensa del canal nacional.

Para representar al gobierno militar viajaron René Rojas Galdámez hacia Argentina; Hernán Cubillos a Brasil, Walter Heitmann Woerner a Estados Unidos, Kaare Olsen Nielsen a Inglaterra; Raúl Bazán a las Naciones Unidas, entre las plazas más importantes.

Los equipos asesores aconsejaron reforzar “comunicacional y culturalmente” las agregadurías en algunos países. De este modo el 19 de noviembre de 1973 se dictó el decreto que aumentó de 10 a 25 el número de plazas de “adictos culturales”. A la cancillería fueron citados entre otros: Maximiano Errázuriz, Lucía Gevert, Jorge Navarrete y Hernán Millas. Los tres primeros aceptaron representar a la Junta en Suiza, Inglaterra y Alemania. Millas rechazó el nombramiento para viajar a Colombia. La misión que se les asignó era evitar que se publicaran noticias sobre Chile en el extranjero. Para coordinar la labor de los “adictos” se constituyó la Dirección de Información Exterior, Dinex y se designó como director a Carlos Ashton, ex gerente de radio Agricultura, quien preparó una gran ofensiva mundial de informaciones. Entre los integrantes de su equipo estuvieron los periodistas Alberto Guerrero, Luis Souza, Mario González y Renato Deformes.

La realización de la Sexta Asamblea de la OEA en Santiago —después de un intenso trabajo de lobby del embajador chileno Manuel Trucco quien contó con el apoyo de su amigo Alejandro Orfila, Secretario General del organismo— fue evaluada como un triunfo de la diplomacia uniformada y su coro de asesores. Como figura invitada estelar estaba anunciada el arribo de Henry Kissinger. El responsable del Departamento de Estado norteamericano venía a observar in situ, los efectos de la misión que en 1970 le fue encomendada por Richard Nixon: evitar a toda costa que Allende culminara su período presidencial. La misión para la diplomacia uniformada era aprovechar la ocasión para mejorar la cada vez más deteriorada imagen externa del país. Al momento de la realización de la reunión ya existían en Chile más de 1.000 personas detenidas desaparecidas, alrededor de 2.000 ejecutados, un número similar de presos políticos y varios más de chilenos exiliados en distintos lugares del mundo. El Departamento Exterior de la DINA ya había realizado dos de sus “operaciones de exterminio”. El 30 de octubre de 1974, el general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert fueron asesinados en un atentado. Un año más tarde, en Roma, Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno quedaron gravemente heridos víctimas de un atentado similar.

El empresario y abogado Ricardo Claro fue designado Coordinador General de la Asamblea y pocos días antes de su inicio, Pinochet sorprendió a todos: pidió la renuncia de Trucco y designó en su lugar a la periodista María Eugenia Oyarzún —quien lo llama “Tito”— de quien destacó “su belleza, su simpatía y su inteligencia”.

Oyarzún estuvo a la cabeza de la delegación chilena que integraban además el propio Trucco, Enrique Bernstein, Sergio Diez, Manuel Pinochet, Javier Illanes,

Tomás Lackington, Miguel Schweitzer, Jaime Guzmán, Fernando Monckeberg, Pedro Correa, Liliana Mahn, Alicia Romo y 19 funcionarios.

Al recordarse entretelones de esta reunión, en el libro *La Historia Oculta del Régimen Militar* (Cavallo, Sepúlveda, Salazar) se señala que la DINA también se preocupó de las actividades extraprogramáticas de los delegados. Uno de sus agentes, ex funcionario de Televisión Nacional y con buenas relaciones en la farándula, propuso constituir una Brigada de Mujeres, realizando un pseudo casting con la ayuda de un periodista del canal. “Decenas de jóvenes fueron reclutadas. Muchas salieron de los propios programas, de cabaret y del círculo de amistades de los agentes. El motel ‘El Sauce’ de la Gran Avenida fue especialmente habilitado para uso exclusivo de la nueva brigada”. Su misión, además de entretener a los delegados, era recoger algún tipo de información de los delegados extranjeros y también de funcionarios chilenos que emitieran comentarios negativos contra el gobierno. La DINA omitió comentar estas actividades extra-programáticas al coordinador general y actual Presidente de Megavisión, el empresario Ricardo Claro.

Nombres conocidos

Sin duda fue de la vertiente gremialista —la UDI en nuestros días— desde donde emergieron los civiles que ocuparon los cargos más importantes en el gobierno militar. Con una excepción: Jaime Guzmán, ideólogo y padre político de Joaquín Lavín y Pablo Longueira, nunca aceptó un cargo público del régimen. Siempre estuvo detrás de las bambalinas. Era la inteligencia en la sombra, pero quien ideó las principales operaciones políticas de esos años. La principal de ellas fue Chacarillas, que marcó un hito en el itinerario institucional trazado por el régimen para prorrogar su poder. Los 77 jóvenes subiendo el cerro con antorchas para recibir la medalla que los hermanaba a los 77 soldados muertos en la batalla de la Concepción, fue organizado por Germán Becker y Enrique Campos Menéndez —que formaba parte, desde 1973, del Consejo que cerró definitivamente la editorial Quimantú— a la usanza de los viejos eventos de los clásicos universitarios. Fueron ayudados por el joven dirigente del Frente Juvenil de Unidad Nacional Ignacio Astete y su equipo formado por Cristián Larroulet y Francisco Bartolucci, otro de los seguidores del gremialismo que llegaron al gobierno, con recomendaciones del abogado y asesor Hugo Rosende. El 8 de marzo de 1976, Sergio Fernández Fernández juró como Ministro del Trabajo reemplazando al general de la FACH Nicanor Díaz Estrada. Su influencia y cercanía a Pinochet sobrepasaba sus funciones de una cartera eminentemente técnica y se dejó sentir de inmediato. Terminó con las invitaciones a la OIT a delegaciones pluralistas, suspendió el estudio del Código del Trabajo y sintonizó con la política de los Chicago Boys.

Hasta su nombramiento como el primer civil en la cartera del Interior, el 12 de abril de 1978, el actual senador UDI Sergio Fernández había ganado importantes cuotas de poder. Formaba parte del equipo de Asesoría Presidencial (ASEP), había diseñado la estrategia de la primera “consulta” de diciembre del año anterior para salir al paso a la contundente condena de las Naciones Unidas (97 votos que incluyó el de Estados Unidos) a Chile por sus constantes violaciones a los derechos humanos y era permanentemente escuchado por Pinochet. Su primera labor, como titular del Interior fue poner la firma, junto a Mónica Madariaga, del decreto que promulgó la Ley de Amnistía que protegía a quienes hubiesen cometido actos de violencia contra terceros desde el 11 de septiembre del 73 hasta ese año. Fernández fue el ideólogo de la impunidad y respondió muchas solicitudes de madres y esposas de detenidos desaparecidos que le pedían información sobre el paradero de sus familiares detenidos por la DINA.

“Es muy factible que la gran mayoría de los presuntos desaparecidos hayan pasado a la clandestinidad o hayan caído en enfrentamientos bajo las identidades falsas que portaban, impidiendo su individualización” (15.06.78).

El reemplazo de la DINA por la CNI, la seguidilla de asesinatos que fueron encubiertos como enfrentamientos, el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, la detención y torturas de los dirigentes políticos —hoy diputados— Carlos Montes y Sergio Aguiló, la detención y condena a tres años de cárcel para los dirigentes sindicales Manuel Bustos y Alamiro Guzmán; la formación de COVEMA, un grupo de Investigaciones, que secuestró a periodistas, asesinando a Eduardo Jara, fueron situaciones represivas ocurridas mientras Sergio Fernández se sentaba diariamente en su sillón de Ministro del Interior, cartera que tiene tareas en materias de seguridad interior y con responsabilidad sobre quienes las realizan. ¿Es que nunca supo nada, como dice y repite en su actual cargo en el Senado? ¿O es tanto lo que sabe que prefiere no saber que sabe? Similar situación ocurre con Sergio Onofre Jarpa, el otro civil —nacionalista y no gremialista— que reemplazó al entonces coronel de la FACH y actual asesor de El Mercurio Enrique Montero Marx. El líder derechista —muy convocado en estos días en todos los programas que recuerdan los 30 años del Golpe— juró un día antes de iniciarse la más grande protesta nacional contra el régimen. 10 mil soldados salieron a las calles y hubo decenas de muertos y heridos en poblaciones y calles. En uno de esos programas, Jarpa señaló —quizás a modo de excusa— que esa orden ya estaba dada y que él solo asumió como le correspondía hacerlo. Lo cierto es que su ingreso al gabinete quedó para siempre estigmatizado por el recuerdo doloroso de quienes perdieron su vida ese 11 de agosto de 1983.

Nuevas víctimas en supuestos enfrentamientos con agentes de la CNI, tanto en Santiago —Fuenteovejuna— como en Concepción y Valdivia y el “suicidio” del carpintero Juan Alegría, a quien se inculpa de ser el homicida de Tucapel Jiménez —asesinado por el jefe de la CNI Álvaro Corvalán, quien cumple cadena perpetua por ello— y la explosión de una bomba en la parroquia de Punta Arenas con el claro objetivo de amedrentar al obispo Tomás González, son hechos de violencia represivas que marcan la gestión del anciano y hoy retirado líder derechista.

Pero sin dudas, el que más consecuencias ha tenido para su imagen es la muerte del transportista Mario Fernández en La Serena. La víctima, destacado dirigente de la Democracia Cristiana de La Serena, fue detenida en su casa por agentes de la CNI y su familia presentó un recurso de amparo. En su respuesta al tribunal, el ministro del Interior avaló y suscribió la explicación dada por sus asesinos: “El detenido murió a causa de los golpes que él mismo se dio contra sillas y escritorios de la oficina donde era interrogado”. La familia llevó adelante un proceso por este homicidio y finalmente se llegó a los culpables. Uno de ellos, el oficial del DINE Carlos Herrera Jiménez —confeso y condenado por ser el autor del asesinato de Tucapel Jiménez— confesó haber participado en el equipo que torturó y provocó la muerte de Mario Fernández. Públicamente y hasta ahora no se conoce ninguna declaración de Sergio Onofre Jarpa para aclarar las razones que tuvo para encubrir este crimen.

Son muchos más los nombres de civiles que forman parte de la historia negra de esta memoria que recién comienza a reconstruirse y de la que aun faltan pegar muchos retazos. Muchos de los nombres que aquí aparecen mencionados han dicho en estos días que quienes deben pedir perdón son los seguidores de Allende y los integrantes de los partidos que lo acompañaron para “sembrar el caos y el terror en el país”. Pero, cuando por boca de quienes lo publicitaron, ya se ha

validado la verdad de muchos sobrevivientes de que jamás existió el Plan Z y que solo fue una excusa para aplicar más y más horrores. O cuando, en los procesos que hoy se sustancian, son los propios exagentes de la CNI y la DINA quienes confiesan que efectivamente torturaron y asesinaron “por órdenes superiores”, destruyendo las verdades oficiales emitidas bajo la forma de comunicados oficiales por los ministros o voceros civiles de turno, surge una pregunta más que necesaria.

¿No es hora que quienes no vistieron uniforme, sino que pudieron aumentar su guardarropa con trajes finos de ministros, funcionarios, asesores o embajadores, den la cara y sean ellos quienes pidan perdón por haber cometido o ser cómplices de los horrores que hoy todo el país, después de 30 años, está conociendo?



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: <http://www.archivo-chile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores.

© CEME web productions 2005

